



Enero – abril 2001

Protesta social, ajuste y democracia: la encrucijada latinoamericana

Por José A. Seoane y Emilio H. Taddei

■ La protesta social y el contexto económico y político



A lo largo del primer cuatrimestre del 2001 se prolongan, y en algunos casos se intensifican, los procesos sociales, económicos y políticos reseñados en el número anterior. El sostenimiento –y en algunos países agudización– de la protesta social, se despliega en un contexto económico signado, para la mayor parte de la región, por la recesión o la desaceleración del crecimiento y por los intentos de profundización de las políticas económicas de corte neoliberal. Esta situación es acompañada por el aumento de medidas represivas y de “criminalización” de las acciones de protesta. La combinación de estos tres procesos (conflictividad social, recesión y ajuste, represión) ha desencadenado en estos primeros meses del año una serie de crisis o momentos de inestabilidad política en algunos países de la región, que señala tanto los límites de los regímenes políticos para dar cuenta de las crecientes demandas sociales como la progresiva deslegitimación de los mismos.

En este marco, la evolución de la conflictividad social en Latinoamérica del período bajo análisis (enero-abril de 2001) ratifica la persistencia de una importante situación de confrontación social. En términos cuantitativos el presente relevamiento arroja resultados similares a los del período anterior (1.219 re-

gistros de conflictos frente a 1.286 para los meses de septiembre-diciembre de 2000).

Las protestas campesino-indígenas de enero y febrero en Ecuador; la marcha por la dignidad indígena iniciada por los zapatistas hacia fines de febrero; la prolongada serie de protestas protagonizadas por pobladores y asalariados en Perú en el marco de la transición política; los conflictos, particularmente del movimiento de desocupados, y la huelga general activa del 21 de marzo en Argentina; y el proceso de luchas desarrolladas por el movimiento campesino indígena y la “Coordinadora” de Cochabamba –entre otros sectores sociales– hacia fines del cuatrimestre en Bolivia, señalan los principales hitos de la conflictividad social reflejado en las cronologías que se presentan a continuación.

En este sentido, desde un punto de vista cualitativo, se verifica en algunos países andinos un aumento de conflictos caracterizados por un crecimiento de las convergencias multisectoriales entre diferentes movimientos sociales que habían protagonizado levantamientos populares en dichos países a lo largo del año 2000, con una importante presencia articuladora de los movimientos campesinos indígenas. En particular, para los casos de Bolivia y Ecuador, dichas convergencias trascienden las reivindicaciones sectoriales para llegar a cuestionar tanto la política económica en general como la legitimidad política del gobierno, instalándose así en la aper-

tura de un momento de crisis política que, aunque de corta duración, amenaza con adoptar un carácter crónico.

Sin duda esta importante conflictividad registrada en los países andinos mencionados anteriormente, sumada a las manifestaciones del MST brasileño, el zapatismo, el movimiento indígena del sur chileno y el movimiento campesino paraguayo, por citar cuatro de las experiencias más significativas, contribuye a consolidar la presencia del sector campesino-indígena como uno de los actores principales de la conflictividad social reciente en la región.

En términos generales esta presencia es acompañada, en este período, por un importante crecimiento de las acciones protagonizadas por los movimientos urbanos. Asimismo, al igual que el cuatrimestre anterior, los asalariados participan de un poco más de un tercio de las protestas. Sin embargo las mismas aparecen restringidas, en la mayoría de los casos, a una territorialidad social o reivindicativa particular o sectorial. De este conjunto se destacan las acciones protagonizadas por los asalariados del sector público, y en particular por los maestros y profesores. Abordaremos más adelante un análisis detallado de esta distribución nacional y sectorial de la conflictividad del presente cuatrimestre.

Considerando el contexto económico latinoamericano en el cual se inscribe nuestra reflexión sobre las disputas sociales, se destaca una tendencia al estancamiento o recesión, agravada particularmente por el “aterrizaje brusco” de la economía norteamericana y la aparente desaceleración del crecimiento de las economías de la comunidad europea. Por otra parte el impacto de los “nuevos episodios” de la crisis financiera internacional (Turquía), combinados con la gran dependencia que de estos mercados tienen hoy buena parte de las economías latinoamericanas, han contribuido a poner una vez más de manifiesto la estrechez de las “salidas a la crisis” en el marco de las recetas neoliberales aplicadas en las últimas décadas. En este cuadro interna-

cional el inicio del año 2001 parece estar signado por sombríos pronósticos incluso para muchos de los países que, a lo largo del año anterior, parecían remontar los ecos de la crisis abierta tras las convulsiones financieras y económicas de 1997 y 1998. En este caso, vale señalar el caso brasileño donde el reciente colapso del sistema energético –resultado de las políticas neoliberales de desregulación y privatización aplicadas en el sector– afectará seguramente la marcha de la economía. Sus consecuencias económicas marcarán probablemente la evolución política y social de dicho país en los próximos meses.

Para el período que analizamos, esta combinación de creciente dependencia financiera, recesión económica y consecuente aumento del déficit fiscal tuvo como resultado una profundización de los ajustes fiscales y de las políticas de desregulación y privatización en buena parte de la región latinoamericana; con sus diferencias, vale señalar al respecto los casos de Argentina, México, Ecuador, Colombia, Panamá y Uruguay. Estas respuestas ortodoxas frente a la recesión económica han agudizado las tensiones sociales y políticas provocadas ya por el proceso de concentración del ingreso y la riqueza que caracteriza al modelo neoliberal aún en sus fases de crecimiento, acentuando incluso las tensiones al interior de los sectores económicos dominantes beneficiados por las políticas neoliberales.

Atendiendo al plano político-institucional cabe señalar tres procesos en particular, a saber: las transiciones políticas, las crisis o momentos de inestabilidad política, y la acen-tuación de las respuestas represivas frente a la protesta social. En el primer caso, vale resaltar la realización de las elecciones presidenciales en Perú tendientes a encausar la crisis política y el ciclo de movilizaciones populares abiertos con el derrumbe del régimen de Fujimori. Dichas elecciones arrojaron como resultado el triunfo en segunda vuelta del candidato neoliberal Alejandro Toledo. Para el segundo caso, además de las crisis políticas que atraviesan durante este cuatrimestre

Ecuador y Bolivia, pueden señalarse también los momentos de inestabilidad política en Argentina y Brasil. La crítica situación económica argentina tuvo como consecuencia recurrentes cambios de gabinete que transformaron la composición original de la alianza gobernante y significaron el fortalecimiento de los sectores más proclives a una profundización de las respuestas económicas más ortodoxas. En el caso de Brasil, la alianza de gobierno, encabezada por el presidente Fernando Henrique Cardoso, conoció una crisis ligada al involucramiento del líder derechista Antonio Carlos Magalhães en el control de votos en el parlamento. Dicha situación, que agravó el enfrentamiento entre el presidente y el partido derechista PFL, parece haber debilitado aún más la coalición gobernante en momentos en que se prepara la sucesión presidencial para las elecciones del próximo año.

En último término, las violentas represiones de manifestaciones que, en el marco de la implementación de estados de sitio y/o emergencia, desembocaron en la muerte y el encarcelamiento y/o procesamiento de líderes sociales en Bolivia y Ecuador –a lo que debe sumarse las detenciones y procesamientos de activistas en Argentina, Honduras y Puerto Rico (conflicto de Vieques)– señalan la peligrosa persistencia de una política de “criminalización” de las protestas.

No es posible concluir este panorama de la situación actual de América Latina sin hacer referencia particular al desarrollo de la política norteamericana hacia la región expresada tanto en los impulsos a los procesos de dolarización y de integración comercial (particularmente el Área de Libre Comercio de las Américas –ALCA) como en los planes de cooperación e intervención militar (en especial el Plan Colombia y el Plan Andino).

En este plano, para la región norte de Latinoamérica, durante el cuatrimestre analizado puede señalarse un proceso combinado que abarca tanto la puesta en marcha de la dolarización en El Salvador y la libre circulación del dólar en Guatemala como la entrada en gigen-

cia del tratado de libre comercio que involucra a estos dos países, Nicaragua y México. A esto se suma la firma de un tratado similar entre la región centroamericana y República Dominicana. Estos procesos de integración monetaria y comercial, en el marco de la extensión de la maquila norteamericana en toda la región, se resignifican a la luz del recientemente anunciado Plan Puebla-Panamá, presentado por el presidente mexicano Vicente Fox y analizado en el presente número por Alejandro Álvarez Béjar, que tiende a consolidar la extensión de la “frontera sur” de los Estados Unidos hasta Panamá y abre las puertas a una explotación intensiva de los recursos naturales de la región a las grandes transnacionales norteamericanas.

Por otra parte, la situación en la región andina pareciera representar hoy desde el punto de vista económico (la incidencia en el mercado mundial del petróleo), político (las recientes protestas en Bolivia y Ecuador contra las políticas neoliberales y la persistencia de las guerrillas en Colombia) y diplomático (el liderazgo de la diplomacia venezolana en el seno de la OPEPy de los países no alineados) un desafío a las pretensiones norteamericanas de “estabilización” y de difusión a escala continental de la ideología del libre mercado. La faz militar de su política aparece aquí con toda encarnadura en el desarrollo del Plan Colombia y del Plan Andino.

Por último, durante el mes de abril tienen lugar las Cumbres de ministros de economía (Buenos Aires, Argentina) y de presidentes de las Américas (Quebec, Canadá) en el marco de la negociación del tratado del ALCA. Dicho acuerdo, que viene siendo negociado desde 1994 y se inspira tanto en el NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte) como en las propuestas impulsadas en la pasada Ronda del Milenio de la OMC (Organización Mundial del Comercio), pretende consolidar los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas en la región desgravando el comercio, avanzando en la privatización de los servicios públicos y removiendo todas las regulaciones que limiten la inversión extranjera. La intención inicial de la nueva administración

norteamericana encabezada por el presidente Bush de convalidar el año 2003 como punto de partida para dicho acuerdo, terminó siendo postergada hasta el 2005. Este resultado señala tanto el particular consenso que recoge la iniciativa norteamericana como las tensiones y disensos que enfrenta su implementación, agravadas por la pérdida de la mayoría republicana en el senado norteamericano.

■ Los sujetos de la protesta social

Mencionamos ya que, en términos cuantitativos, durante el primer cuatrimestre del año 2001 puede apreciarse un nivel de protestas sociales similar al relevado para los últimos cuatro meses del año pasado. Asimismo, si atendemos a la distribución de las mismas por región (norte, andina y sur) resulta que cada una de ellas concentra un tercio de los registros de conflictos relevados, al igual que en el período anterior. No obstante ello, si consideramos la misma distribución por país se aprecian desigualdades respecto a la etapa pasada, siendo los casos más significativos la disminución de las protestas en Uruguay y su crecimiento en República Dominicana.

Como ya lo hemos hecho en los informes anteriores, presentaremos a continuación un breve análisis de los resultados que arroja la clasificación de los registros de conflicto relevados en relación al sujeto social protagonista de los mismos, contrastándolos con los resultados reflejados en el número anterior y señalando las principales experiencias que aparecen reflejadas en las cronologías que integran la presente sección.

En primer lugar vale señalar que el sector asalariado (público y privado) presenta el mayor porcentaje de acciones, situándose en un 30% del total. Dicha cifra reproduce en términos generales la predominancia de este sector durante septiembre-diciembre de 2000 (31,96%). Desagregados, ambos sectores presentan un índice de 18,57% para los asalariados del sector público y un 11,31% para los del sector privado. Aunque un poco menor que el cuatrimestre pasado, vuelve a ratificarse el peso

importante que los trabajadores del sector público guardan en la conflictividad regional, como contracara natural de las políticas de reducción del gasto fiscal y de privatizaciones. De este conjunto se destacan para el presente período las acciones encaradas por los maestros y profesores, que representan el 6,22% de todos los registros. Las mismas pueden apreciarse particularmente en los casos de México, Venezuela, República Dominicana, Perú, Guatemala y Argentina. También tienen un importante lugar las manifestaciones desarrolladas por los trabajadores de la salud pública (5,32%), siendo especialmente significativas en Honduras, República Dominicana y Colombia.

Si consideramos el caso de los trabajadores del sector privado puede apreciarse un leve crecimiento, tanto en términos absolutos como porcentuales, respecto de los últimos cuatro meses del año pasado (del 8,79% al 11,31%), resultando una mayor incidencia de los trabajadores de la industria. En este sentido resaltan los casos de Argentina y Perú.

Finalmente, podemos mencionar las luchas encabezadas por trabajadores desocupados. Las mismas son particularmente significativas en el caso de Argentina (representan un poco más de un cuarto de la conflictividad nacional¹). De manera similar a los resultados obtenidos para los últimos dos cuatrimestres del año pasado, en la experiencia argentina puede distinguirse, a partir de su conflictividad específica, la constitución de un “movimiento de desocupados” que, por lo menos en las dimensiones que adopta en dicho país, no aparece reflejado de manera similar en la región.

Por otra parte los movimientos campesino-indígenas reúnen un 12,12% de los registros realizados, concentrados fundamentalmente en Chile (referidos al conflicto mapuche), México (especialmente la marcha zapatista), Bolivia, Guatemala y Ecuador, contra un 11,74% en el período anterior. Al porcentaje de este sector para el presente análisis deben agregarse sin embargo (sobre todo en el caso de Ecuador, Bolivia y México) varios de los registros de las protestas multisectoriales en las cuales otros

sectores sociales (sindicatos, movimientos estudiantiles, movimientos urbanos, etc.) confluyeron con sectores campesino-indígenas. El incremento porcentual de las acciones de carácter multisectorial (4,82% en septiembre-diciembre 2000 contra 6,4% en enero-abril 2001) responde fundamentalmente a las masivas protestas existentes en Bolivia y Ecuador y a la amplia participación de varios sectores sociales en la caravana zapatista en México. En el caso de Bolivia y Ecuador dichos conflictos, en los que el sector campesino-indígena es de vital importancia, profundizaron las convergencias sectoriales que se expresaron en las revueltas ocurridas en el 2000. Los mismos cuestionaron una vez más la profundización de los planes de ajuste neoliberales y desembocaron en situaciones de crisis políticas que cuestionaron la legitimidad de los gobiernos de esos países.

Así, para estos países (con un gran componente de economía agraria) las acciones desarrolladas por el movimiento campesino-indígena parecen desempeñar un papel importante en la dinámica de confluencia con otros sectores sociales en la lucha contra el impacto de las políticas neoliberales en diferentes sectores (agrario, urbano, sector público). Tal como señala Augusto Barrera en el artículo² que se presenta en este número sobre el caso ecuatoriano, “la conflictividad social generada, activada y visibilizada desde el movimiento indio tiene un carácter universal” que permite una dinámica organizativa de articulación de múltiples espacios sociales que trascienden a dicho sector. Esta situación contrasta con la realidad del sector asalariado (público y privado) en donde, si bien se registra el mayor porcentaje de enfrentamientos del período, los mismos parecen manifestarse de forma más dispersa y con mayores dificultades de articulación.

Por último, vale hacer una consideración particular del fuerte incremento de las protestas protagonizadas por movimientos urbanos (de un 2% a un 12%). Dichas acciones reúnen distintas reivindicaciones y actores, aunque en su gran mayoría orientan sus demandas hacia el Estado. En ese sentido la mayoría de las

acciones de estos movimientos pueden agruparse en reclamos frente a catástrofes naturales (en particular en El Salvador alrededor de los sucesivos terremotos que asolaron a dicho país durante los meses considerados), contra el alza de las tarifas de los servicios públicos (Panamá y República Dominicana), y en demanda de políticas de desarrollo y obras públicas (especialmente en Perú).

■ De los zapatistas a los piqueteros: una reseña de la protesta social en los espacios nacionales.

La transición mexicana, abierta en el último mes del año pasado con la asunción del presidente Vicente Fox, y las expectativas de una real democratización política y social ligadas a este proceso, fueron puestas a prueba durante el período que analizamos durante el desarrollo de la caravana zapatista. La Marcha de la Dignidad Indígena, impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y protagonizada por el movimiento indígena mexicano secundado por numerosos sectores de la sociedad civil no indígena, fue sin lugar a dudas el evento más importante del panorama político y social mexicano. Ados meses y medio de la asunción del gobierno panista de Vicente Fox, la caravana del EZLN “por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena” fue una muestra elocuente del potencial movilizador y cuestionador de la experiencia zapatista en la vida política mexicana. Las dos semanas de duración de la marcha y los días de estancia de la comandancia zapatista en el DF de México permitieron colocar en primera escena del debate político nacional la incapacidad (desde que estallara la revuelta chiapaneca hace ya siete años) de los gobiernos de orientación neoliberal para dar una solución democrática y efectiva a la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas de México. Dicha incapacidad quedó una vez más manifiesta en el rechazo de los sectores mayoritarios del partido oficialista (PAN), del principal partido de oposición (PRI), y sorprendentemente de la bancada senatorial del PRD, a producir una reforma constitucional que die-

ra una solución favorable a los reclamos formulados, reconociendo el derecho de autonomía de las comunidades indígenas.

También en el marco de una transición política, la conflictividad registrada durante el período en el Perú prolonga los antagonismos del cuatrimestre anterior ligados a la situación político-institucional producida por la caída del régimen fujimorista. Las protestas locales y regionales centradas en demandas democrático-institucionales (particularmente en los dos primeros meses del año) y las manifestaciones por reivindicaciones salariales y derechos laborales (especialmente a partir de marzo), entre las diversas acciones del período, parecen situarse en la disputa por el carácter y los alcances de la “desfujimorización” del régimen político y social peruano.

En el capítulo de las crisis políticas mencionadas anteriormente en este artículo los dos casos más agudos son, sin dudas, el de Bolivia y Ecuador. Bolivia se vió sacudida durante el mes de abril de 2001 por un violento conflicto social que adquirió dimensiones políticas, llegando a cuestionar (a través de los pedidos de renuncia del presidente Hugo Banzer formulados por distintos sectores sociales y políticos) la legitimidad del actual gobierno. El conjunto de las acciones que se manifiestan durante enero, febrero y marzo de este año retoman y amplían la dinámica de los reclamos sociales de la segunda mitad del año anterior. La intensificación de las luchas (sector salud pública, campesinos cocaleros, choferes, docentes y Comité Cívico de Cochabamba, entre otros) habla de las demandas insatisfechas de dichos actores en el marco de la política económica neoliberal aplicada por el gobierno. En el mes de abril (inicio de una nueva fase del programa gubernamental de erradicación de las plantaciones de coca) se produce una profundización y radicalidad de la contienda marcada por la confluencia de diversos sectores gremiales, campesinos y urbanos en torno a diversas reivindicaciones: oposición a la erradicación de los mencionados cultivos, desmilitarización de la región del Chapare, aumento del salario mínimo y

salario familiar, estatización de las empresas privatizadas, tarifas del agua en Cochabamba, etc. Las demandas que acompañan la marcha de Cochabamba a La Paz organizada por la COMUNAL son una muestra de esta convergencia sectorial y pluralidad reivindicativa en la oposición a la política económica. Las numerosas manifestaciones sectoriales que, desde distintos puntos del país, tienden a converger en La Paz y que fueron ferozmente reprimidas por las Fuerzas Armadas bolivianas, reflejan el creciente descontento popular en relación al gobierno nacional y constituyen un punto de articulación política multisectorial aún mayor que el del período anterior.

El inicio del año en Ecuador coincidió con el anuncio de un paquete de medidas económicas realizado por el gobierno. Dichas medidas, previamente acordadas con el FMI, intentaron establecer un aumento del 25% en el precio de la gasolina, un 100% en el precio del gas de uso doméstico y un 75% en los precios del transporte. Dicho paquete fue el desencadenante de un vasto proceso de resistencia popular y multisectorial que conoció violentos enfrentamientos con las fuerzas represivas en el marco del estado de emergencia decretado por el gobierno y que se saldó con la muerte de varios manifestantes. Los sectores involucrados en la protesta (CONAIE, Coordinadora de Movimientos Sociales - CMS, Frente Popular, entre otros) lograron obtener del gobierno nacional la firma de un acuerdo que estableció el congelamiento, por un año, de los precios de los combustibles; la reducción inmediata del precio del gas para uso doméstico; la revisión de las tarifas de transporte nacional y provincial; la libertad de todas las personas detenidas durante el levantamiento; un incremento del presupuesto para organismos indígenas y la participación de organizaciones indígenas y sociales en el proceso de canje de deuda externa por proyectos sociales, entre otros puntos. Este nuevo ciclo de protestas en el Ecuador, que se suman a las protagonizadas el año pasado por los sectores campesinos-indígenas nucleados en la CONAIE, está estrechamente vinculado a las consecuencias sociales y económicas del proceso de do-

larización de la economía ecuatoriana impulsado por el gobierno del presidente Noboa en el 2000. Asimismo, la obtención de numerosas reivindicaciones de los actores involucrados debe ligarse a la confluencia multisectorial que fortaleció la capacidad de presión del movimiento.

La Argentina aparece en el período reseñado como uno de los casos más destacados de inestabilidad política en la región. Dicha situación resulta de la crisis económica y del impacto social regresivo de las medidas impulsadas por el gobierno para superar la situación recesiva. Este país presenta, al igual que en los meses anteriores, un importante nivel de conflictividad. Cabe destacar los cortes de ruta protagonizados por los movimientos de desocupados y las luchas de los sectores asalariados (público y privado) en relación a despidos y rebajas salariales provocados por empresas que se ven afectadas por la recesión económica. Continuando con una tendencia ya presente en el período pasado el conflicto de los “piqueteros” se manifiesta con regularidad en el Gran Buenos Aires (periferia de la capital) y continúa desarrollándose en las provincias del interior del país más afectadas por la privatización de empresas públicas y la crisis de las economías regionales. A mediados de marzo, en momentos del anuncio del paquete económico ultraortodoxo realizado por el efímero Ministro de Economía Ricardo López Murphy, los sectores de desocupados en lucha confluyen con otros sectores sindicales (CTA, CGT disidente y CCC y sectores estudiantiles) en su oposición a dichas medidas, forzando la renuncia del mencionado funcionario. En el mes de mayo un nuevo y prolongado corte de ruta protagonizado por los “piqueteros” de La Matanza forzarán al gobierno nacional a una negociación que contemplará varias de las reivindicaciones del movimiento. En términos generales podemos decir que la evolución del conflicto social en Argentina se encuentra en gran medida relacionada a la situación de crisis económica ya mencionada y a la profundización de las respuestas ortodoxas a dicha crisis (profundización del

ajuste fiscal, mantenimiento de la convertibilidad dólar-peso y endeudamiento externo). La creciente inestabilidad económica impactó de lleno en la evolución de la situación política como lo reflejan los sucesivos cambios de gabinete nacional y, fundamentalmente, en el Ministerio de Economía. Tras el fracasado paquete de medidas impulsado por Ricardo López Murphy (representante de los sectores financieros más ortodoxos) el desembarco (por segunda vez) de Domingo Cavallo en dicho ministerio parece consolidar la tendencia del gobierno al mantenimiento de una política económica que promueve una creciente concentración de la riqueza en desmedro de los sectores asalariados.

■ América Latina: los escenarios y los sujetos de las protestas contra la mundialización neoliberal.

Por último, y en función de la importancia que cobraron las protestas contra la mundialización neoliberal en Latinoamérica, creemos necesario reseñarlas brevemente. Estas protestas, cuyo número creció en relación a la etapa anterior, tuvieron lugar en ocasión de diversas reuniones internacionales que se llevaron a cabo en la región. Las mismas evidencian la creciente importancia que los movimientos sociales otorgan al rechazo de los efectos de la actual globalización en el continente y los crecientes procesos de convergencia y coordinación de estas organizaciones en el plano regional. En primer lugar, señalaremos la marcha contra la Globalización y por la Vida que reunió cerca de 10.000 personas y que marcó la apertura del Foro Social Mundial realizado en la ciudad de Porto Alegre, entre el 25 y el 30 de enero del presente año. Dicho Foro, en el cual participaron más de 15.000 personas, constituyó una novedosa experiencia de confluencia de las diferentes organizaciones y movimientos sociales que conforman el movimiento contra la mundialización neoliberal. Algunos análisis más detallados del movimiento antimundialización neoliberal y en particular del Foro Social Mundial, han sido desarrollados en diferentes libros publicados

recientemente³. En el mes de febrero, y en momentos en que se desarrollaba la caravana zapatista, la ciudad mexicana de Cancún fue escenario de masivas protestas contra la globalización convocadas para repudiar la realización en dicha ciudad de la reunión del Foro Económico Mundial de Davos.

La reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Santiago de Chile en el mes de marzo fue el escenario de manifestaciones contra la globalización reprimidas por la policía de dicho país. El cónclave de los ministros de economía de los países involucrados en el ALCA realizada en Buenos Aires a inicios de abril provocó acciones de repudio a dicho acuerdo que se expresaron a través de actos públicos en la Plaza de los Congresos y en la Plaza de Mayo y en una masiva manifestación organizada por el Comité de Movilización en Argentina contra el ALCA, conformado por numerosas organizaciones y movimientos sociales de dicho país. En ocasión de estas protestas en Buenos Aires es importante destacar la presencia de delegaciones sindicales del Cono Sur, nucleadas en la Coordinadora de Confederaciones Sindicales del Cono Sur (CCSCS). En dicha oportunidad también se registró en la frontera argentino-uruguayana un acto de repudio al ALCA en la localidad de Paysandú organizado por militantes sindicales de la CUT brasilera.

La cumbre de presidentes de las Américas (con excepción de Cuba) realizada en la ciudad de Québec, Canadá, para discutir sobre el proyecto del ALCA, fue la ocasión para la organización de la Segunda Cumbre de los Pueblos de América, en la cual se repudió el actual proyecto de integración comercial a escala continental y se formularon diagnósticos y propuestas alternativas para avanzar en una integración continental acorde a las necesidades de las mayorías populares. En dicha ocasión se registraron también importantes protestas en la ciudad de Québec en las que participaron numerosos militantes de organizaciones latinoamericanas. El conjunto de estas protestas y la destacada parti-

cipación de movimientos sociales latinoamericanos dan cuenta de la creciente importancia de los colectivos de la región en la lucha contra la mundialización neoliberal.

■ Notas

1 Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia 2001 "La protesta social en la Argentina", en *OSAL* (Buenos Aires) N° 4, Junio, 47.

2 Ramírez, Franklin 2001 *Las paradojas del levantamiento indígena*, Documento de trabajo, citado por Barrera, Augusto 2001 "Nada sólo para los indios", en *OSAL* (Buenos Aires) N° 4, Junio, 87.

3 Aguiton, Christophe 2001 *Le monde nous appartient* (París: Plon). Monereo, Manuel y Riera, Manuel (compiladores) 2001 *Porto Alegre. Otro mundo es posible* (Madrid: El Viejo Topo). Seoane, José y Taddei, Emilio (compiladores) 2001 *Resistencia Mundiales. De Seattle a Porto Alegre* (Buenos Aires: CLACSO).